



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA POLICÍA  
POLICÍA NACIONAL

## OFICIO

S/REF.: Expediente nº **001-042089**  
FECHA: 10 de julio de 2020  
ASUNTO: Varios inmigración

### DESTINATARIO:

El día 1 de junio de 2020 tuvo entrada en esta Dirección General solicitud de información efectuada por a través del Portal de la Transparencia, con número de expediente arriba referenciado, en la que solicitaba:

*"Me pongo en contacto para pedir información en relación con los vuelos para repatriar migrantes en situación irregular, los conocidos como vuelos de deportación. ¿Cuántos vuelos para repatriar migrantes en situación irregular se han hecho en los últimos 10 años (con las cifras año a año)? ¿Cuánto costó cada vuelo? ¿Cuántos migrantes viajaban en cada vuelo? ¿Cuál era el país de destinación de cada vuelo? ¿Qué compañía aérea realizó cada vuelo? Finalmente, ¿me podrían facilitar todos los anuncios de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial para el Transporte aéreo de pasajeros para traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su custodia de los últimos 10 años?"*

Una vez recibido el informe correspondiente de la Unidad competente de la Policía Nacional, este Centro Directivo ha resuelto conceder el acceso parcial a la información solicitada, conforme al artículo 16 de la LTAIPBG, que reseña: *"En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida"*.

No se facilitan los datos relativos a la nacionalidad de las personas expulsadas ni el destino de los vuelos ya que el conocimiento y difusión de este parámetro podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados, dificultando en el futuro poder documentar por parte de las diferentes Embajadas y Consulados a ciudadanos extranjeros irregulares. Todo ello afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones, aplicándose en este caso el artículo 14.1c) de la LTAIPBG, que dice: *"El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: c) Las relaciones exteriores"*.



Esta limitación ha sido avalada por propio el Consejo de Transparencia en numerosas ocasiones manifestando al respecto que “dadas las circunstancias que rodean los procedimientos de expulsión, principalmente a su vinculación con la imagen pública del país de origen de estos ciudadanos y de la importancia de la colaboración de las autoridades nacionales en las labores de documentación, considera que el conocimiento de la restante información solicitada sí podría suponer un perjuicio, razonable y no hipotético, a las relaciones exteriores de España, comprometiendo la colaboración de los Estados de origen. Asimismo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de expulsión se configura como una sanción de carácter administrativo, las dificultades derivadas de su identificación podrían perjudicar a la propia resolución del expediente de expulsión y, en consecuencia, a la sanción de la infracción cometida”.

(...) “No debe dejarse de lado la situación de nuestro país respecto de la inmigración de carácter irregular. En efecto, no se desconoce la importancia de la presión migratoria que sufre España, en su consideración de frontera exterior de la Unión Europea así como de la importancia de la adopción y puesta en marcha efectiva de políticas que favorezcan los flujos migratorios de carácter regular así como la lucha contra la trata de seres humanos que, en ocasiones, están implicados en estas situaciones irregulares. Esta labor de vigilancia y control de situaciones contrarias a la normativa vigente en materia de inmigración y asilo requiere de la colaboración de los países de origen, tanto para la tramitación de los expedientes de expulsión como para la adopción de medidas que frenen la trata de seres humanos. Teniendo esto en consideración, y especialmente la incidencia en la efectividad de las medidas adoptadas para el control de la inmigración irregular y la trata de seres humanos que se derivaría del acceso a la información solicitada, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera que no existe un interés superior que justifique que se proporcione la información”.

En definitiva, (...) “puesto que el elemento clave de la solicitud de acceso es precisamente conocer el país de origen, elemento que es el que puede acarrear los problemas en las relaciones exteriores de España en lo que respecta a la tramitación de los expedientes de expulsión”.

Igualmente, no es posible ofrecer datos sobre el coste de las operaciones ya que los mismos son gestionados por los Servicios Centrales de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Por lo que respecta a los anuncios de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial para el Transporte aéreo de pasajeros para traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su custodia de los últimos 10 años”, deberán ser facilitados, en su caso, por la Subsecretaría del Interior.



Una vez expuesto lo anterior, a continuación se relaciona la información relativa a los vuelos de repatriación realizados en los últimos diez años:

**AÑO 2011:**

- 1.- 2.280 personas repatriadas mediante 107 vuelos.
- 2.- 1.109 personas repatriadas mediante 31 vuelos macro.
- 3.- 321 personas repatriadas mediante 15 vuelos conjuntos operados por FRONTEX.

**AÑO 2012:**

- 1.- 2.240 personas repatriadas mediante 100 vuelos.
- 2.- 759 personas repatriadas mediante 16 vuelos macro.
- 3.- 252 personas repatriadas mediante 13 vuelos conjuntos operados por FRONTEX.

**AÑO 2013:**

- 1.- 2.017 personas repatriadas mediante 98 vuelos.
- 2.- 648 personas repatriadas mediante 15 vuelos macro.
- 3.- 445 personas repatriadas mediante 18 vuelos conjuntos operados por FRONTEX.

**AÑO 2014:**

- 1.- 1.631 personas repatriadas mediante 105 vuelos.
- 2.- 698 personas repatriadas mediante 18 vuelos macro.
- 3.- 237 personas repatriadas mediante 17 vuelos conjuntos operados por FRONTEX.

**AÑO 2015:**



- 1.- 1.476 personas repatriadas mediante 85 vuelos.
- 2.- 499 personas repatriadas mediante 13 vuelos macro.
- 3.- 240 personas repatriadas mediante 15 vuelos conjuntos operados por FRONTEX.

#### **AÑO 2016:**

- 1.- 1.237 personas repatriadas mediante 72 vuelos.
- 2.- 217 personas repatriadas mediante 7 vuelos macro.
- 3.- 304 personas repatriadas mediante 14 vuelos conjuntos operados por FRONTEX.

#### **AÑO 2017:**

- 1.- 1.412 personas repatriadas mediante 76 vuelos.
- 2.- 87 personas repatriadas mediante 3 vuelos macro.
- 3.- 394 personas repatriadas mediante 19 vuelos conjuntos operados por FRONTEX.

#### **AÑO 2018:**

- 1.- 856 personas repatriadas mediante 54 vuelos.
- 2.- 119 personas repatriadas mediante 5 vuelos macro.
- 3.- 605 personas repatriadas mediante 19 vuelos conjuntos operados por FRONTEX.

#### **AÑO 2019:**

- 1.- 1.067 personas repatriadas mediante 82 vuelos.
- 2.- 28 personas repatriadas mediante un vuelo macro.





3.- 669 personas repatriadas mediante 19 vuelos conjuntos operados por FRONTEX.

**AÑO 2020 (a fecha 29 de febrero):**

1.- 143 personas repatriadas mediante 14 vuelos.

2.- No se ha producido ninguna repatriación mediante vuelos macro.

3.- 139 personas repatriadas mediante 3 vuelos conjuntos operados por FRONTEX.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA**



**Francisco Pardo Piqueras**